

## CONSEJO SUBREGIONAL DE TRABAJADORES ANDINOS (CSTA) - COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA Y VENEZUELA.

### Impactante violación al derecho a la vida en Colombia.

**CSTA, Bogotá, 19/10/09.-** Por más de 60 años Colombia ha sido un país signado por la violencia, é inmersa durante más de cuatro décadas en un sangriento conflicto interno armado, en el que todos los grupos ilegales y aún legales, cometen abusos contra la población civil, atentan contra la vida de personas inocentes y han generado el desplazamiento forzado de más de tres millones de seres humanos, que se han visto obligados a huir de sus hogares, constituyéndose así en la segunda población más desplazada en el mundo, después de Sudán.

Seguimos sufriendo este conflicto interno que hasta ahora no se ve un desenlace posible. Los continuos intentos de solución militar han resultado inútiles frente a la cruda realidad de desigualdad social, la exclusión y el horror que alienta la confrontación interna.

La persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y/o falsos positivos atribuibles a miembros de la fuerza públicas, fundamentalmente al Ejército, según informe de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz para el Examen Periódico Universal de Colombia ante las Naciones Unidas, es extremadamente grave.

Igualmente, el quinto informe de la Agencia Asturiana de Cooperación presentado por su director Rafael Palacios en una rueda de prensa en días pasados, acompañado de Javier Orozco colombiano refugiado en Asturias y coordinador del Programa Asturianos de Derechos Humanos sobre situación de los derechos humanos en Colombia, acusa directamente al Ejército y a la Policía, del 95% de los casos denunciados sobre asesinato, secuestros, desapariciones o tortura. Hizo mención especial a las ejecuciones extrajudiciales, en las que las Fuerzas armadas “tienen una inequívoca responsabilidad”, lo que denominó “crímenes de Estado”.

Menciona también la investigación que actualmente se esta adelantando sobre 1.300 casos en los que murieron más de 1.600 personas.

El relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales señor Philip Alston quien estuvo recientemente en Colombia, también emitió un comunicado de prensa en el que designa los casos llamados “falsos positivos”, como asesinatos a “sangre fría y premeditados de civiles inocentes, con fines de beneficio”... “de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

Destacó además el señor Relator, que es bajo, el número de personas comprometidas en estos crímenes las que están siendo judicializadas. Consideramos que contribuye a la búsqueda de la verdad, justicia y reparación frente a las horribles ejecuciones extrajudiciales, el criterio expresado por un personaje de alto nivel de una institución tan importante como las Naciones Unidas.

Sobre la impunidad en las investigaciones derivadas de los fallos en las operaciones de la justicia ordinaria de los casos de ejecuciones extrajudiciales, se pronunció igualmente el Relator Especial como “obstrucción, en estos asesinatos”.

En su informe destaca la “persistencia de las estructuras paramilitares y de los asesinatos cometidos por estos grupos, a pesar de los procesos de desmovilización”, en el que según lo denunciado por la Fiscalía, solamente 600 paramilitares reconocieron haber cometido 21.000 asesinatos. De la misma manera se refirió a los crímenes perpetrados por la guerrilla de las FARC y el ELN en contra de la Sociedad Civil.

También se pronunció contra la estigmatización del trabajo legítimo y legal que adelantan organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que distintos personajes, en especial del alto gobierno, deslegitima y agrede. En la parte preliminar de su informe dice. “Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos”.

En sus conclusiones recomienda que la designación del nuevo Fiscal General de la Nación sea una persona “independiente, fuerte y de prestigio”, o sea que no se elija en los altos cargos de los órganos de control del Estado, funcionarios de bolsillo de actual gobierno. (El principal candidato del gobierno para este cargo es el Doctor Camilo Ospina, ex ministro de defensa, ex embajador ante la OEA del actual gobierno).

En lo relacionado con la reducción de asesinatos y atentados, pese a los indicadores presentados por el gobierno, los hallazgos preliminares de la visita del señor Relator, demuestran que tales logros han sido posibles mediante el sacrificio del respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y las denuncias emitidas documentadamente por organismos de derechos humanos, pese a las declaraciones evasivas de los altos mandos militares, están comprobando la existencia de redes criminales en las Fuerzas armadas que de manera sistemática venían cometiendo asesinatos contra humildes ciudadanos, que luego eran presentados como guerrilleros dados de baja en combates.

Los más de 1.700 asesinatos bajo esta modalidad, según denuncias presentadas, demuestran que no eran hechos aislados por parte de unas pocas “manzanas podridas” como lo argumentaron y quisieron distorsionar algunos altos mandos militares, sino un procedimiento perverso establecido como una rutina en distintos batallones y brigadas en el país.

Es necesario y urgente dar solución a la crisis humanitaria en Colombia, desmontando efectivamente los grupos paramilitares y todo su andamiaje que los fortalece, para responder así de una manera más efectiva a las recomendaciones de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Reiteramos una vez más en la importancia de proteger a la población civil a través de acuerdos y compromisos humanitarios, e insistimos en el camino del dialogo para una solución política y negociada del conflicto armado que tanta sangre, ha derramado en nuestro país en el que debe haber participación autónoma de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional